

## GUERRA Y PAZ EN EUROPA, 1799-1815: LA ERA NAPOLEONICA

### Entre la Revolución y el Imperio: Europa al final del siglo XVIII

#### El mapa político y social

Los estados más importantes de Europa eran, con la excepción de Gran Bretaña, monarquías absolutas al margen del carácter más o menos ilustrado de sus monarcas: Rusia (Catalina II, 1762-96, y su hijo Pablo I, desde 1796), Austria (José II, 1780-90, su hermano Leopoldo II, 1790-92, y su hijo Francisco II, desde 1792), Prusia (Federico Guillermo II, 1786-97, y su hijo Federico Guillermo III, desde 1797), España (Carlos IV, desde 1788); y, en un segundo plano, Portugal, los estados escandinavos (Dinamarca y Suecia) y el reino de las Dos Sicilias, en el sur de Italia. Rusia se había afirmado durante el reinado de Catalina II como la gran potencia territorial del Este de Europa, con intereses que desbordaban su plataforma continental: expansión hacia el oeste --por el Báltico--, beneficiándose de los repartos del reino de Polonia (entre 1772 y 1795), y a costa de los turcos por el sur (salida al mar Negro).

Austria (o, mejor, la monarquía de los Habsburgo) era, en vísperas de la revolución, un estado extenso y poblado (los mismos habitantes y más territorios que Francia), pero heterogéneo y disperso: al núcleo danubiano (a su vez dividido entre el área austríaca y el área húngara, cada una de ellas con diversos pueblos en su interior), se habían sumado las adquisiciones de comienzos del siglo XVIII: Lombardía y Países Bajos austríacos (Bélgica). Quizá fue la monarquía de los Habsburgo, en la persona de José II, la que más avanzó por el camino de las reformas (con la intención de afirmar el poder y los recursos de la corona): abolición de los privilegios fiscales de la nobleza, abolición de la servidumbre, tolerancia religiosa, disolución de parte de los órdenes monásticos, supeditación de la iglesia católica al estado; pero las protestas de la nobleza dejaron sin efectividad buena parte de estas medidas. Al mismo tiempo, la política centralizadora de la monarquía creó problemas: rebelión en los Países Bajos (1789) en defensa de los privilegios de la oligarquía local y del alto clero, pero que también agrupó a sectores demócratas en torno a Vonck (estos últimos fueron derrotados por los primeros en 1790, quienes a su vez carecieron de apoyos para enfrentarse a las tropas austríacas); y estuvo a punto de producir la ruptura con la nobleza húngara, a la que se le quiso imponer la oficialidad del alemán. Los años de la revolución iban a suponer, para los Habsburgo, cambios territoriales de importancia: pérdida de los Países Bajos y Lombardía, en parte compensados por la adquisición de Venecia (1797) y por los territorios obtenidos en el noreste gracias al tercer reparto de Polonia (Cracovia y Galitzia occidental).

Prusia se había convertido en una potencia importante durante el reinado de Federico II el Grande (1740-1786), con la incorporación de Silesia y los territorios obtenidos en el primer reparto de Polonia, que permitieron la conexión entre los territorios prusianos del centro de Alemania y el núcleo más oriental. Federico el Grande fue otro de los notorios monarcas ilustrados, pero las reformas que se efectuaron entonces, aunque mejoraron la administración y la educación e implantaron la tolerancia religiosa, no significaron cambios políticos o sociales de envergadura: poder absoluto del monarca, privilegios de la nobleza (junkers), servidumbre de los campesinos. Y, tras la muerte de Federico II, sus sucesores abandonaron las veleidades reformistas.

La inclusión de España entre las grandes potencias resulta más discutible pues, aunque su imperio americano todavía le aseguraba unos recursos importantes, no podía por sí sola medirse a Gran Bretaña o a Francia; de hecho, su política exterior estuvo ligada a Francia (pactos de familia), frente a Gran Bretaña. Los intentos de reforma promovidos por los ministros ilustrados de Carlos III y Carlos IV no consiguieron transformar la sociedad porque la capacidad de maniobra de esta política se vio limitada por los intereses básicos de la nobleza (por ejemplo, en el tema de la reforma agraria, o en el de la reforma fiscal); y, tras la revolución, se abandonó.

La excepción a este panorama era Gran Bretaña, monarquía de carácter parlamentario (desde 1688), en la que el soberano (desde 1760, Jorge III) tenía las prerrogativas limitadas por una suerte de constitución no escrita: no podía suspender la aplicación de las leyes, percibir un nuevo impuesto, alzar y mantener un ejército permanente en tiempo de paz, sin el consentimiento del Parlamento, y gobernaba rodeado de un gabinete y un primer ministro (desde 1783, William Pitt el joven) escogidos de acuerdo con la mayoría de la cámara electiva del Parlamento (los Comunes), en la que whigs y



torias constituían las agrupaciones más importantes. Gran Bretaña era una potencia marítima y comercial, con intereses enfrentados a Francia, también con colonias en Norteamérica y en la India, y esta rivalidad había conducido a varias guerras en el siglo XVIII, la más reciente la guerra de la Independencia de Estados Unidos, finalizada con el tratado de Versalles (1783), ventajoso para Francia. Un posterior acuerdo comercial (1786) entre ambas potencias, que estableció la reducción mutua de tarifas de artículos manufacturados y productos alimenticios, sería, en los años futuros, germen de resentimiento francés, al considerarlo desventajoso, pues obstaculizaba su industria en momentos en que la crisis agraria limitaba los excedentes agrícolas a exportar.

Otros dos estados de menor entidad, las Provincias Unidas y Suiza, escapaban de la forma monárquica. La primera era una confederación de siete provincias (de entre las cuales Holanda era la más importante), con los Estados Generales como organismo central y con un "estatúder" (Guillermo V, desde 1751), príncipe hereditario de la casa de Orange, al frente del mismo. Las Provincias Unidas eran un poder declinante, debido a la pérdida de importancia de las tradicionales funciones de Amsterdam como puerto y plaza financiera a nivel internacional, y esta decadencia económica creó malestar entre la burguesía que estaba privada de poder político. A las tensiones habituales entre partidarios del estatúder y los miembros del patriciado urbano, estos últimos deseosos de una mayor autonomía de los estados provinciales, se sumó en las últimas décadas del siglo un movimiento burgués, "patriota", que reivindicaba la democratización de las estructuras políticas. El enfrentamiento, desde 1780, acabó con la intervención prusiana en favor del estatúder y el exilio de los patriotas (1787). Suiza era una confederación formada por 13 cantones (al margen de la república de Ginebra), gobernada por un patriciado con escasa conciencia unitaria, debido a las diferencias religiosas y lingüísticas. Poder económico y militar de muy escasa entidad (aunque muchos suizos servían en ejércitos extranjeros), Suiza constituía un enclave estratégico. Antes de 1799 tanto las Provincias Unidas como Suiza habían caído en la órbita de influencia francesa, como repúblicas hermanas: República bávara (1795) y República helvética (1798), respectivamente.

Otro rasgo de este mapa era la fragmentación territorial de los territorios italianos y alemanes. Italia era tan sólo una unidad geográfica, repartida entre más de una docena de estados, entre ellos el ya citado reino de las Dos Sicilias (el territorio continental de Nápoles y la isla de Sicilia), el reino de Piamonte-Cerdeña, la República de Venecia (con posesiones en la orilla oriental de la costa adriática: Istria y Dalmacia), los Estados Pontificios y la República de Génova; además, Austria disponía de posesiones en el norte de Italia (la Lombardía: o sea, los ducados de Milán y Mantua). Junto a esta fragmentación, otra característica importante era la creciente influencia austríaca, bien directamente (Lombardía), bien a través de familiares de los Habsburgo: en Toscana, en Nápoles, en Módena. Los territorios del norte eran, por lo general, los más desarrollados económicamente y también los que tenían gobiernos más reformistas (Piamonte, Lombardía, Toscana). Entre 1796 y 1799, la presencia francesa trastocó por completo el mapa italiano, produciendo la simplificación, aunque no la unidad, de la península.

En el caso de Alemania, la fragmentación era mayor: la población alemana estaba dividida en más de 350 entidades, desde minúsculos principados y ciudades estado hasta entidades de mayor tamaño: Prusia en primer lugar, pero también Baviera, Sajonia y, en un plano más discreto, Württemberg, Baden y Hannover. Todos estos territorios, así como los territorios de habla alemana de la casa de Austria, estaban incluidos en una vasta Confederación: el Sacro Imperio Romano Germánico, organismo de hecho dirigido por Austria (su monarca tenía asegurada mayoría en el colegio electoral y, por tanto, el puesto de emperador), pero con muy escaso poder real. Cada estado seguía su propia política y esta fragmentación y la heterogeneidad de sus leyes dificultaba la asunción de un sentimiento nacional común --más allá del ámbito cultural-- y el propio desarrollo económico. De hecho, existían considerables diferencias entre los diversos territorios alemanes en el grado de este desarrollo y de su tejido social: en general, menos rasgos feudales --menor peso del régimen señorial, mayor desarrollo de la burguesía-- en el oeste, sobre todo al oeste del Rin, que en el este. Fue esta zona más occidental de Alemania la que primero sufrió la influencia de la Revolución Francesa y la que, en 1797, resultó incorporada a Francia.

En el orden económico y social, las características de los territorios europeos también eran diversas. En términos globales, puede decirse que la Europa del norte y del oeste presentaba unas transformaciones mayores que la Europa del sur y del este. En un extremo cabe situar a Gran Bretaña, que sumaba a su ya tradicional papel de potencia comercial marítima un más reciente desarrollo

agrícola e industrial, aunque la industrialización, y los cambios que acompañaban a ésta (proletarización del campesinado agrícola, crecimiento de la población urbana, desarrollo de la burguesía y de las clases trabajadoras) eran todavía incompletos y localizados. En otro extremo, amplias áreas de la Europa mediterránea y oriental, donde la economía seguía siendo básicamente agraria, asentada en técnicas tradicionales, y el feudalismo, en mayor o menor grado, dominaba las relaciones sociales: servidumbre, prestaciones señoriales en trabajo o en especie, derechos jurisdiccionales de los señores; consecuentemente, en estas áreas el desarrollo urbano era escaso y burgueses y trabajadores asalariados tenían una débil presencia. Ciertamente que una zona tan extensa presentaba, a su vez, diferencias importantes: mientras que en Rusia la servidumbre personal seguía en pie con todo vigor (lo estaría hasta 1861), en algunas partes de Italia (Piamonte, Lombardía) y de España (Cataluña) el proceso de erosión de las estructuras feudales era ya grande, en tanto que en Austria la política reformista de la monarquía ilustrada se había visto frenada por la nobleza (tras la muerte de José II, en 1790, quedó sin efecto la sustitución de las prestaciones en trabajo y en especie de los campesinos a sus señores por pagos en metálico) y en Prusia la nobleza también se iba a resistir con éxito a la extensión a sus estados de la liberación de los campesinos de las tierras de la corona, decidida por Federico Guillermo III (entre 1799 y 1805). Francia era, desde luego, un caso aparte, pues allí la revolución había significado un completo desmantelamiento de los elementos feudales; la expansión francesa supuso, también en este terreno, cambios importantes, aunque no tan profundos como en la misma Francia, en las repúblicas hermanas y en los territorios incorporados al estado francés, como tendremos ocasión de ver.

### ***Las consecuencias de la Revolución Francesa***

Tras una década, la Revolución Francesa había trastornado Europa. Había dividido el continente entre partidarios (patriotas, jacobinos, radicales) y enemigos (contrarrevolucionarios). Una división que se acompañaba de enfrentamientos, en el terreno ideológico y en el terreno militar, entre Francia y casi todos los demás estados, pero también de enfrentamientos dentro de cada estado, Francia incluida, entre defensores y adversarios. En último término, los primeros sólo se imponían allí donde contaban con el apoyo de las bayonetas francesas, lo cual sería al mismo tiempo señal de su debilidad y germen de una mayor oposición.

1. En principio, los sucesos de Francia (1789-91), no suscitaron reacción contraria de las potencias europeas. Al margen de algún inconveniente, como los efectos negativos que la abolición de los derechos feudales tuvo sobre los príncipes alemanes con posesiones en territorio francés, la revolución era vista como factor de debilitamiento del estado galo y, por tanto, bien recibida por Austria, Prusia y Gran Bretaña; además, Francia era el estado absolutista por excelencia, factor que propiciaba la simpatía o condescendencia hacia la revolución por parte de las monarquías reformistas --Austria-- o parlamentarias --Gran Bretaña--. Pero cuando los acontecimientos mostraron la profundidad de una revolución que ponía en peligro la persona de los mismos monarcas franceses, emparentados --María Antonieta era la tía de Francisco II-- con los austríacos, subvertía las bases del Antiguo Régimen y amenazaba con exportar esta subversión, debido a la universalidad del mensaje revolucionario, el enfrentamiento resultó inevitable.

2. Desde 1792-93 los estados europeos lucharon contra la revolución desde diversos frentes:

a) Oponiéndose a la difusión de sus principios en sus propios territorios por medio de la contrapropaganda o de la censura.

*Contrapropaganda:* Los fundamentos ideológicos del rechazo de la revolución fueron establecidos por los intelectuales que se oponían a ella. El pionero, y más influyente, fue Burke, que en sus Reflexiones sobre la Revolución en Francia (1790) contrapuso el gradualismo del proceso inglés con el rupturismo francés; mientras que la sociedad inglesa había ido evolucionando sin romper con su pasado, en armonía con las leyes naturales, los revolucionarios franceses habían desgarrado el tejido social, sustituyendo la sabia gestión del progreso natural por la dictadura de los principios abstractos, basados en la razón, que amenazaban con la destrucción de la propiedad, en nombre de la igualdad, y con la implantación de la tiranía, en nombre de los derechos de un individuo aislado frente al estado en una sociedad desprovista de cuerpos sociales jerarquizados. Otra obra importante fue la del abate Barruel, Memorias al servicio de la historia del jacobinismo (1797-98), alegato contra partidarios de la Ilustración, filósofos y masones, todos ellos responsables del complot urdido para traer la Revolución; las ideas de Barruel habrían de influir especialmente en el pensamiento ultraconservador

español durante la monarquía de Fernando VII. Pero la difusión de estas obras se encontraba limitada por el restringido círculo del público, eminentemente culto, que podía acceder a ellas. Por ello resultó más efectiva, desde el punto de vista de la formación de una opinión pública hostil a la revolución, la difusión de una literatura popular de contenido contrarrevolucionario (folletos, caricaturas, poemas). Fue en Gran Bretaña donde esta propaganda, apoyada, inspirada o dirigida por el gobierno y destinada al consumo interno, alcanzó mayor resonancia, porque era allí donde existía una mayor libertad de prensa que había permitido, en un primer momento, la difusión de literatura prorrevolucionaria que ahora había que contrarrestar: entre noviembre de 1792 y enero de 1793 (cuando se produjo el juicio y ejecución de Luis XVI e inquietaba la amplia difusión de la obra de Paine, *Derechos del hombre*) aparecieron numerosas publicaciones antirrevolucionarias que se hacían eco de la argumentación de Burke, simplificando sus ideas, y presentaban de forma caricaturizada las de sus adversarios, al tiempo que apelaban al miedo y al patriotismo de sus compatriotas como resortes en la lucha contra la revolución.

*Censura*: Fue la política seguida por la monarquía española, interesada en impedir que sus súbditos conociesen los cambios que se producían en Francia, por temor a sus efectos contagiosos, aunque no se adoptaron medidas sistemáticas de control y represión hasta 1792, cuando se asoció la Inquisición al control de las entradas de libros; un año más tarde se prohibía la publicación en el país de todo tipo de noticias, favorables o no, sobre la revolución en el país vecino. Pero España no era una excepción. En la misma Gran Bretaña también se adoptaron medidas de censura a través de sucesivas disposiciones que prohibieron la publicación y circulación de escritos sediciosos (1792), cualquier tipo de relación con Francia sin el consentimiento previo del gobierno (1793), cualquier ofensa oral o escrita contra el monarca y su gobierno (1795) y, de forma más sutil, aumentando los impuestos sobre la prensa, con la finalidad de encarecerla y dificultar así la circulación de los periódicos populares (1796).

b) Dando marcha atrás en el terreno de las reformas, que eran vistas como el camino que conducía a la revolución. Es lo que ocurrió en España, desde los últimos años del ministerio de Floridablanca y durante el valimiento de Godoy. Esta trayectoria, que sin embargo no era rectilínea, sino que estaba sujeta a los vaivenes derivados del estado de las relaciones con Francia, tuvo como hitos destacados la supresión de las cátedras de derecho público y de derecho natural y de gentes, el retorno de los jesuitas exiliados en Roma (1797) y, sobre todo, la caída en desgracia de Jovellanos (1798). Pero no solamente en España: otras monarquías también se volvieron atrás en el camino de las reformas. En Austria, la reforma agraria de José II fue suspendida por Leopoldo II. En Gran Bretaña, el temor a la revolución condujo al gobierno de Pitt a la suspensión del Habeas Corpus en 1794 (medida que estuvo vigente entre 1794 y 1795 y de nuevo entre 1798 y 1801, y que significaba la posibilidad de encarcelamiento sin juicio), la prohibición de mítines (1795) y al fortalecimiento de las disposiciones legales contra los sindicatos (1799 y 1800).

c) Enfrentándose en el terreno militar con el estado revolucionario. Este enfrentamiento opuso a Francia con Prusia y Austria desde 1792 y, desde 1793, con una Primera Coalición en la que figuraron todos los países europeos, con excepciones menores (Dinamarca, Turquía, algunos principados alemanes). Los triunfos franceses propiciaron la expansión de la nación revolucionaria hasta alcanzar las fronteras naturales (Pirineos, Alpes y Rin) y la retirada de la mayoría de sus contrincantes: al finalizar 1795 sólo se mantenían en la lucha Gran Bretaña y Austria. No conviene exagerar las motivaciones ideológicas en una lucha en la que también tuvieron su parte factores más convencionales: expansionismo francés, al margen de la voluntad de los pueblos; apetencias territoriales o económicas de las potencias enfrentadas a Francia. Este último elemento explica, por ejemplo, los celos existentes entre austríacos, prusianos y rusos, enfrascados en hacerse con los despojos de Polonia (repartos de 1793 y 1795), en perjuicio de las operaciones contra Francia y el cambio de campo de España, que en virtud del tratado de San Ildefonso (1796) reanudó la tradicional política de alianza con Francia y rivalidad con Gran Bretaña, el enemigo que obstaculizaba las relaciones con las colonias de América.

3. Los principios revolucionarios tuvieron una mayor o menor acogida en cada territorio en función de las circunstancias económicas, sociales y políticas del área en cuestión, y también en función de la capacidad de intervención francesa. En última instancia, el triunfo de la revolución, cuando estalló fuera de Francia, se hizo posible gracias al apoyo decisivo de las bayonetas francesas, necesarias para su mantenimiento. Tal situación crearía tensiones que iban a obstaculizar el arraigo de la revolución y

a dar fuerza a los movimientos de oposición, algo que puede entenderse si se tiene en cuenta que la presencia francesa significaba:

a) Exacciones y supeditación de los intereses económicos del territorio en cuestión a Francia. En un primer momento (abril de 1792 a marzo de 1793) estuvo por delante la política de liberación de los pueblos, aunque desde noviembre de 1792 el objetivo fuese también alcanzar las fronteras naturales. Pero, a partir de junio de 1794, y durante toda la época napoleónica, los planteamientos fueron diferentes, y las prácticas también: hacer vivir al ejército sobre el país enemigo, sanear las finanzas y la economía francesa gracias a la explotación de los países conquistados. Durante el primer período, la guerra no fue un conflicto clásico entre estados, sino un enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución; y fue sobre los elementos contrarrevolucionarios sobre los que se intentó desplazar el coste de la guerra: el ejército no había de vivir sobre el país, sino que debía ser avituallado por Francia, o por proveedores contratados por el gobierno francés. Pero, desde el comienzo, estos principios chocaron con la falta de logística adecuada para su aplicación: a falta de avituallamiento, el ejército necesitó recurrir al saqueo y efectuar requisas, pues las contribuciones impuestas a los privilegiados no eran suficientes para su mantenimiento. A partir de 1794 tales prácticas se generalizaron. Por ello no ha de extrañar que se produjesen revueltas contra la presencia francesa, como ocurrió en Italia (en 1796, en Pavía y en Lugo, ambas en el N de Italia; y de forma generalizada en 1799).

b) Menosprecio a las aspiraciones políticas de la población en cuestión: por ejemplo, imposición en Suiza de una constitución unitaria (1798), o cambios de fronteras en el norte de Italia, o supeditación de los aliados ideológicos de los territorios ocupados a los militares franceses.

c) Choque con capas dirigentes tradicionales, sobre todo la Iglesia: la expansión francesa se produjo en principio por territorios mayoritariamente católicos, y cuando el régimen ya se había ganado una reputación de hostilidad a la Iglesia (desde la condena de la Constitución civil por el papado, en mayo de 1791, hasta la firma del Concordato, en 1802, el régimen francés permaneció asociado con el anticatolicismo); el comportamiento anticlerical de las tropas francesas (explicable por el medio de proveniencia: una Francia donde el clero había tomado, en su mayoría, posiciones contra el régimen) tampoco ayudó a atraerse a la Iglesia. A ello hay que añadir las expropiaciones de los bienes eclesiásticos, sobre todo monásticos. Estos factores contribuyeron a que, en la orilla izquierda del Rin (la Renania ocupada por las tropas francesas desde 1792), la Iglesia católica fuese militantemente antifrancesa, y a que aplicase sus diversos medios de propaganda (textos escritos, pero también el púlpito, la actividad de los monjes mendicantes y el confesionario) en la labor de desprestigio de la causa revolucionaria, sin que se produjesen divisiones en su seno entre alto y bajo clero; porque la presencia francesa sirvió para despojar a la Iglesia, pero no para redistribuir la riqueza clerical, y para destruir las instituciones eclesiásticas, en vez de democratizarlas. También en Italia el clero fue un factor contrarrevolucionario.

d) Política social relativamente conservadora, que dificultó la atracción sectores populares. Así ocurrió en Renania, donde se mantuvo del diezmo (y otros derechos señoriales), a pesar de haber sido ya abolido en Francia, hasta 1798; y de esta supresión tardía solamente se beneficiaron los propietarios de tierra pues la mayoría de los campesinos, arrendatarios, vieron sustituido lo que pagaban en concepto de diezmo por un aumento de las rentas. Tampoco la confiscación de propiedades de la nobleza desafecta y de la iglesia benefició a los campesinos: hasta 1803 estas tierras permanecieron en poder de la administración francesa, que las continuó arrendando en condiciones más onerosas para sus usuarios. Otro buen ejemplo lo tenemos en el sur de Italia, donde la implantación del régimen republicano en el antiguo reino borbónico de Nápoles no supuso, contra lo esperado por los campesinos, cambios en la propiedad de la tierra y el cese del pago de los impuestos de carácter feudal, sino que se acompañó de un incremento de la carga fiscal sobre las provincias decretada por las nuevas autoridades.

Estas circunstancias permiten entender que se diesen movimientos de rechazo de la influencia francesa, tanto desde posiciones jacobinas, a cargo de revolucionarios desengañados por la política francesa (así sucedió en Italia, donde el descontento por la división de la república de Venecia en 1797, en contra de los sentimientos de los patriotas italianos, acabó provocando una insurrección en el Piamonte en 1799), como, sobre todo, desde planteamientos antifranceses, de componente popular, básicamente campesino y a veces con matices de cruzada religiosa. Conviene detenerse algo en este tipo de oposición a la revolución, que llamaremos antirrevolucionaria, para distinguirlo de las



"Ayer, hoy y siempre  
a Zaragoza la defiende  
su gente"

posiciones contrarrevolucionarias, a cargo de las élites y con un proyecto político concreto. No siempre cristaliza en rebelión abierta (guerra de los campesinos en Bélgica, 1798; insurrecciones en Suiza, 1798; en Italia, 1796, 1798-99), sino que a veces la masiva presencia militar francesa o la prudencia de las autoridades impiden la revuelta, aunque no la aparición del bandolerismo o de actitudes de resistencia pasiva. En Calabria en 1799 se produjo la única rebelión triunfante, la que dirigida por el cardenal Ruffo y con las tropas colocadas bajo la advocación de la Santa Fe (de ahí el nombre de "sanfedismo") consiguió vencer a los partidarios de la República (establecida en 1798 tras el hundimiento de la monarquía borbónica de Nápoles) en una campaña de dos meses (marzo-abril). En el sanfedismo se mezclan los elementos comunes de la oposición popular antifrancesa con los aspectos peculiares de la sociedad italiana del sur, por lo que resulta de difícil caracterización. No puede reducirse a una cruzada de restauración religiosa, a pesar de que contenga elementos en tal sentido, porque los republicanos no habían tocado para nada los intereses de la iglesia los seis meses que permanecieron en el poder. Tampoco es exactamente una revuelta social, una guerra de pobres contra ricos, pese a que hay rasgos que hacen pensar en que éste es el principal componente: un campesinado pobre, que ve en la burguesía a su explotador inmediato (porque es esta burguesía como rentista o recaudadora de impuestos señoriales quien le oprime económicamente); una burguesía que, al proclamarse la república, accede junto con la nobleza liberal al poder de los municipios; unas autoridades que decepcionan las esperanzas campesinas de que la proclamación de la república significase la inmediata abolición de impuestos y derechos señoriales; un cardenal Ruffo que, actuando en nombre del destronado monarca napolitano (Fernando IV), promete a quienes se enrolen en las filas de su ejército exenciones fiscales; un ejército que está compuesto mayoritariamente por campesinos. Pero todas estas evidencias esconden una realidad más compleja: la situación de Calabria se ha de considerar a la luz de las viejas rivalidades municipales, reforzadas por las promesas francesas de recompensar a los pueblos prorreplicanos otorgándoles privilegios administrativos, y de rivalidades en el seno de cada municipio, difíciles de reducir a una única explicación social o económica. Estas rivalidades, que escindían verticalmente cada comunidad, provenían en ocasiones de la división que había creado la política borbónica de la década anterior, que con el incremento de sus exigencias fiscales sobre la nobleza y la iglesia (exigencias que resultaban necesarias para financiar el esfuerzo de la preparación militar del reino frente a la amenaza francesa) había favorecido el que parte de estos sectores se alejasen de los Borbones y, al producirse el hundimiento del régimen, aceptasen la república. En una sociedad en la que predominaban las solidaridades verticales estas tomas de postura escindían al conjunto de la misma, al margen de la posición social de sus miembros.

En áreas no controladas por los ejércitos franceses, la receptividad fue mayor o menor según las tensiones sociales existentes y el grado de afinidad de la sociedad en cuestión con Francia; este era casi nulo en Rusia y relativamente escaso en España y en la mayor parte de Alemania. De ahí que la agitación prorrevolucionaria fuese de poca entidad en estos lugares (conspiración de Picornell en España, 1795; focos de jacobinismo en la orilla izquierda del Rin, en especial en Maguncia (Mainz) donde las tropas francesas habían establecido una república entre octubre de 1792 y abril de 1793, con apoyo de los jacobinos del lugar, mientras que resultó más importante en Gran Bretaña, donde, además, las transformaciones económicas estaban generando conflictos en una sociedad con una burguesía ascendente, pero privada de representación política, y unas capas artesanales en peligro de proletarianización. Los acontecimientos franceses --y las dificultades económicas generadas por la guerra con Francia: aumento de los impuestos, disminución del comercio-- fortalecieron en las islas la semilla de un radicalismo que demandaba desde tiempo atrás la reforma política. Se crearon sociedades radicales --la más importante, la London Corresponding Society, 1792, llegó a contar en 1795 con 3.000 miembros activos--, compuestas por artesanos y miembros de las capas medias, que compartían la creencia de Thomas Paine en la igualdad de derechos políticos de todos los hombres, realizada a través de una república democrática (aunque la LCS no incluía la república en su programa), y en la capacidad de la reforma política para solucionar los problemas de la pobreza, mediante la aplicación de una tasa sobre la propiedad que aseguraría el trasvase de riqueza de ricos a pobres. Pero los radicales no lograron difundirse más allá de los sectores de trabajadores respetables y resultaron debilitados por una mezcla de política represiva y de propaganda conservadora, de forma que hacia 1796 el radicalismo había sido acallado. En los años siguientes subsistió la posibilidad de una revolución, pero en un contexto bien distinto: el movimiento radical había dejado paso a organizaciones conspirativas en cuyos planteamientos entraba la insurrección. Esta se intentó en el marco peculiar de Irlanda, donde la mayoría de la población, campesinos católicos, estaba subordinada a una minoría protestante de ascendencia británica, que a su vez disponía de escasa



"Ayer, hoy y siempre  
a Zaragoza la defiende  
su gente"

autonomía política respecto a Londres. Desde 1791 la "Society of United Irishmen", básicamente compuesta por protestantes, se había propuesto unir a los irlandeses, con independencia de su religión, en un campaña en favor de la libertad política, pero la falta de concesiones del gobierno británico condujo a la SUI a radicalizar sus posiciones, mientras que la intransigencia protestante le obligó, a su pesar, a depender del extremismo católico. En estas condiciones el retardo de la ayuda francesa condujo a una sublevación a destiempo (1798) y a la práctica desaparición de la amenaza revolucionaria en Irlanda. Fuera de Irlanda, la situación más preocupante para la clase gobernante se produjo en 1797, con los motines de la flota del canal de la Mancha (Spithead) y del mar del Norte (Nore). En ambos casos las pésimas condiciones materiales de la tripulación propiciaron, al parecer, una cierta difusión de las ideas revolucionarias, facilitada también por el origen irlandés de más de una décima parte de la marinería

**Obra publicada en 1993 (Madrid, Editorial Eudema), descatalogada en la actualidad**